

Pemex en el limbo

La decisión de la calificadora de deuda Fitch Ratings, de ubicar de estable a negativa la actual calidad crediticia de Petróleos Mexicanos, lo que equivale a la antesala de la degradación, levantó una espesa polémica sobre si se trata de condenar a priori la estrategia del nuevo gobierno o simplemente la respuesta al diagnóstico actual sobre la salud de la empresa productiva del Estado. La ex paraestatal está atrapada en un círculo vicioso que, por falta de ingresos suficientes para cubrir el servicio, le obliga a contratar más deuda, pese a la colosal existente, de 105 mil millones de dólares. De hecho, su última cuota al barril sin fondo fue de 2 mil millones de dólares.

Dada la intención del próximo gobierno de enderezar el timón, la acción de la calificadora irritó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien la calificó de corresponsable del fracaso de la reforma energética a la que respaldó. En cuatro años de presencia de privados nacionales y extranjeros, dijo, no se ha extraído un solo barril de petróleo, lo que empujó al consorcio que descubrió un rico yacimiento frente a las costas de Tabasco, integrado por las firmas británica Premier Oil, estadounidense Talos Energy, y mexicana Sierra Oil & Gas, a declarar que sin producción aún, le paga al Estado 150 millones de dólares anuales de regalías.

A su vez, la próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle, manifestó su extrañeza dada la intención de fortalecer a la ex empresa pública. Los dardos, sin embargo, habla de un mal negocio al pretenderse una nueva refinaría en Dos Bocas, Tabasco; de una mala estrategia del grupo parlamentario de Morena en sectorizar a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, lo que implicaría perder su autonomía, y la pésima jugada a la posibilidad que bajo el siguiente gobierno la producción de la empresa privilegie al mercado local.

Sería grave sustentar una posible degradación sobre hechos inciertos. Se diría que, en tal caso, más que defender a Pemex, se defiende, justo, la reforma energética. Lo cierto es que Petróleos Mexicanos, de acuerdo con un diagnóstico de quienes han conocido sus entrañas, requiere una cirugía mayor, dada la necesidad de su nómina; su sujeción a los dictados de la Secretaría de Hacienda y de la maraña de normas a cumplir. La exigencia de rehabilitación habla de revertir un deterioro permanente del patrimonio de la empresa, de dotarla de una verdadera autonomía de operación y manejo presupuestal, y de renegociar la colosal deuda que arrastra hacia el largo plazo. Los nuevos préstamos deben canalizarse hacia proyectos productivos.

El escenario debería apuntar realmente al marco de una empresa productiva, no productora. Aunque el modelo de empresa productiva del Estado se calcó de

Canadá, éste en la práctica recoge sólo algunos puntos, dejando de lado, por ejemplo, la creación de un Consejo de Administración con expertos en la materia, no simples financieros. El reto es recuperar la plataforma de producción que tenía la firma hace 20 años. ¿Es malo intentarlo?

Pintura de guerra. En lo que plantea una suerte de ultimátum al nuevo gobierno, la calificadora de deuda Moody's amenaza con degradar la calidad crediticia del país si se le despoja de la autonomía a los órganos reguladores surgidos de la reforma energética, es decir la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La manzana de la discordia se ubica en un párrafo de la reforma a la ley de la Administración Pública Federal en que se plantea sectorizar ambas a la Secretaría de Energía, lo que es incompatible con la ley dado que se sectorizan órganos descentralizados. La diputación de Morena ya aceptó corregir el párrafo. Queda, sin embargo, la impresión de que las calificadoras han adoptado el estilo Trump.

COLUMNA DE ENRIQUE CAMPOS SUAREZ. Octubre 25 del 2018

Inestabilidad externa, más fragilidad interna

¿Alguien en el gobierno de transición se habrá tomado la molestia de ver cómo anda el ambiente en el mundo financiero? La lista de tensiones es larga y pasa por China, Estados Unidos, Arabia Saudita, el Brexit. Hay un ambiente de cautela que ha implicado un vuelo a la calidad. Incluso, los instrumentos de refugio financiero para los tiempos difíciles, como el oro, muestran presiones en su precio como reflejo de los empujones en la puerta de entrada a esas trincheras.

En fin, no son los mejores momentos para que un mercado emergente quiera jugar con su estabilidad. Y, sin embargo, México da muestras en este momento de que puede comportarse como el país inestable e impredecible que solía ser hasta finales del siglo pasado.

Hoy inicia una consulta, dirigida y amañada, que puede cambiar el rumbo de los aviones sobre dónde van a aterrizar, pero también de la confianza en la estabilidad económica y financiera con el siguiente gobierno. En el actual contexto de inestabilidad global, no es sólo decidir si un aeropuerto se construye en Texcoco o en Santa Lucía, es mandar una señal de incertidumbre ante una decisión que fue tomada hace tiempo, que está en fase de ejecución y que ahora se pretende cambiar sin razones verdaderas.

No es tan sencillo como cree el propio presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que no hay nada que temer, que no puede haber desequilibrios macroeconómicos, problemas en la Bolsa, devaluación o nada de eso si se suspende una obra en proceso como la del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Hace falta algo más que entenderse con las empresas contratistas. Es un

asunto de costos de indemnización y de falta de seguridad jurídica ante decisiones que claramente rayarían en lo autoritario.

Si en esta discusión de la cancelación del aeropuerto las voces del gobierno saliente y de los partidos políticos opositores al gobierno entrante no se escuchan, es porque están anuladas desde la aplastante victoria del 1 de julio. Pero los reclamos que sí se escuchan no son parte de ningún complot. Ni los organismos internacionales o las firmas calificadoras tienen intereses oscuros en la construcción de Texcoco. Son advertencias de desequilibrios internos que se pueden combinar con la fragilidad externa y causar consecuencias financieras serias.

Por supuesto que también hay voces interesadas y que tratan de usar el sentido común para hacer entender al gobierno entrante lo absurdo que es cancelar este proyecto. Que no quede duda de que el regreso a los 20 pesos por dólar de hoy en el mercado de menudeo es una consecuencia directa de la incertidumbre por el aeropuerto. Y de que las advertencias sobre el futuro manejo de la industria petrolera, de las finanzas públicas y de la relación con los capitales privados son avisos a tiempo de que México puede quedar del lado de las desconfianzas en las calificaciones crediticias internacionales.

No es una cuestión de miedo, es un poco de entendimiento de lo frágiles que son los equilibrios y de lo selectivos que pueden ser los capitales ante cualquier evidencia de insensatez. ecampos@economista.com.mx